

EL LASTRE NACIONALISTA

En relación al papel de los partidos nacionalistas catalanes y vascos en nuestra historia contemporánea están instalados tres tópicos en el discurso de las elites políticas e intelectuales que demuestran la habilidad de los grupos secesionistas para vender mercancía averiada a sus ingenuos interlocutores del resto de España. El primero consiste en afirmar que los nacionalismos, sobre todo el catalán, han sido positivos factores de modernización y de europeización a lo largo del siglo XX. Desde este enfoque, su aportación a la vida española a partir de su aparición como fuerzas sociales y parlamentarias poderosas tras el Desastre de 1898, habría sido muy valiosa al haber estimulado con su visión renovadora y dinámica el progreso del conjunto del Estado, tanto en el terreno económico como en el cultural e institucional. Así, figuras relevantes de esta corriente, tales como Prat de la Riba, Cambó o de la Sota, se nos presentan con la imagen de próceres ilustrados e inteligentes, que supieron combinar su fidelidad a sus regiones de origen con el servicio al interés general español, y que si en ocasiones su nacionalismo pudo aparecer como exacerbado o perturbador, se debió más a la incompreensión de sus coetáneos centralistas que a su voluntad separatista. En cuanto a los especímenes más rabiosos, algunos de ellos instalados claramente en el golphismo o en la pura y simple demencia, como Arana, Maciá o Companys, se oculta su venenosa actuación bajo un velo de disímulo o a través de una mitificación sentimentaloides. El segundo lugar común, falaz como el primero, radica en el postulado de que la estabilidad política y la gobernabilidad no son posibles sin su concurso y que, por consiguiente, los grandes partidos nacionales deben colaborar con ellos, ganándose su apoyo mediante medidas descentralizadoras que les otorguen cada vez mayor poder, no sólo en sus supuestas “naciones”, sino también, en un ejercicio de masoquismo rayano en la estupidez, en las instancias clave del Estado. Y el tercero es aún si cabe más asombroso porque defiende la peregrina idea de que los nacionalismos catalán y vasco representan sectores profundamente democráticos fuertemente comprometidos con las libertades civiles y los derechos fundamentales y, en este sentido, cualquier forma de oposición a sus planes disolventes y a sus pretensiones divisivas es una muestra de fascismo intolerable, merecedora de las más enérgicas condenas.

Examinemos cada una de estas aseveraciones desprovistos de prejuicios ideológicos, descargados de pasiones cegadoras y equipados con la fría objetividad del observador distante. Nada más lejos de la realidad que atribuir a los nacionalismos periféricos españoles un efecto de

catalizador de la competitividad económica y de la innovación industrial. De hecho, Cataluña y el País Vasco empezaron a prosperar cuando se suprimieron sus privilegios, propios del Antiguo Régimen, y los correspondientes regímenes forales, que levantaban barreras a la libre circulación y a la eficiencia del mercado global peninsular, lo que por cierto choca frontalmente con su absurda nostalgia de un sistema jurídico y político que les devolvería a los tiempos del arbitristo y del corporativismo más inoperantes y caducos. Fue el Estado español, crecientemente liberal y unificado, el que creó el marco que permitió a las burguesías industriales catalana y vasca desarrollar sus empresas y utilizar la abundante mano de obra procedente de otras partes del territorio nacional. Tampoco conviene olvidar que los aranceles especiales de que disfrutaron sus productos manufacturados gracias a disposiciones dictadas por “Madrid”, en contra de los deseos de los terratenientes castellanos y andaluces, alimentaron un crecimiento que no hubiera sido posible si se les hubiese dejado inermes frente a la competencia de otros países europeos tecnológicamente más potentes. Pasemos a esa supuesta fatalidad de su carácter imprescindible cuando el gran partido nacional que gana las elecciones generales lo hace sin alcanzar la mayoría absoluta, lo que conduce indefectiblemente a la frenética transferencia de competencias y de recursos financieros para mayor gloria de los caciques separatistas. Pues bien, bastaría que el centro-derecha y el centro-izquierda españoles, que acumulan reunidos el respaldo de más del ochenta por ciento de los votantes, alcanzasen un pacto de Estado en virtud del cual ante exigencias nacionalistas peligrosas para la integridad y la cohesión de la Nación o para el ejercicio efectivo de las funciones de la Administración central, se prestasen apoyo parlamentario mutuo, en forma de programa común o de simple abstención constructiva, para que todas las ínfulas soberanistas de los Pujol, Arzalluz, Carod, Mas e Ibarretxes de este mundo se mutasen en mansos balidos ovejunos. Por último, el complejo de populares y socialistas ante sus forzados socios nacionalistas, que les impulsa a reconocerles unas virtudes democráticas de las que carecen, es uno de los misterios más insolubles que alberga nuestra sociedad. Si hay una doctrina incompatible con los principios y valores constitucionales de libertad, igualdad, solidaridad y pluralismo, es el nacionalismo etnicista, que otorga a la identidad cultural, racial o lingüística, el máximo rango en la jerarquía axiológica organizadora de la convivencia. El atropello continuo y sistemático de la dignidad de las personas y de sus derechos básicos que los nacionalistas practican de manera inmisericorde al servicio de la construcción de sus nacioncillas inventadas debería suscitar el rechazo más firme de los partidos de ámbito nacional y no su inexplicable sumisión a los designios de los que tienen como proyecto explícito la liquidación del

orden creado por la transición y la voladura de la ejemplar concordia nacional nacida en 1978.

La verdad tan repetida de que el desconocimiento de la Historia condena a su repetición es plenamente aplicable al caso que nos ocupa. Los nacionalistas han aprovechado los períodos de libertad ofrecidos por la Restauración canovista, la Segunda República y el régimen alumbrado tras el fallecimiento del autodenominado Generalísimo, un total de unos sesenta años en tramos interrumpidos por dos dictaduras militares si tomamos como punto de partida la pérdida de Cuba y Filipinas a finales del XIX, no para apuntalar lealmente la democracia y la sociedad abierta, sino para trabajar denodadamente en su demolición. Su parte de responsabilidad en la llegada de Primo de Rivera y de Franco al poder fue enorme por sus incesantes embates contra la unidad nacional tanto durante la monarquía alfonsina como en el sexenio republicano, lo que combinado con la violencia revolucionaria de la izquierda socialista y anarquista hizo imposible la paz. Ahora están entregados a su tarea habitual de corrosión de los pilares del sistema democrático y de ahí sus ataques sin cuartel a la Constitución de 1978 y a la Monarquía parlamentaria. No han cambiado ni un ápice y sus objetivos, sus métodos y su perseverancia deletérea siguen inalterados. Son un lastre, una enfermedad, una desgracia y, de hecho, el único conflicto no superado en la España moderna. Hemos de asumir esta dolorosa e incómoda evidencia: su integración es imposible y el único remedio aplicable es su definitiva neutralización. Si nos vemos abocados a una Segunda Transición, probablemente será traumática y su coste altísimo, aunque aún estamos a tiempo de reaccionar. Si la gigantesca mole de España se alza para preservar su unidad, garantía de los derechos y libertades de todos sus ciudadanos, los nacionalistas no le duran ni un minuto. Ahora bien, hacen falta dosis considerables de lucidez, patriotismo, voluntad y valor. Ojalá los encontremos.

Aleix Vidal-Quadras